



ACADEMIA DE LA RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO EDUCATIVO

OCTUBRE DE 2019

**MEMORIAS DEL VII CONGRESO INTERNACIONAL Y
IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN DERECHO EDUCATIVO**

Universidad Autónoma de Chiapas

ESTATUS JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA

Andrés Villafuerte Vega

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica; RIIDE C.R.

RESUMEN

En la presente ponencia se analiza el régimen general y universal de protección establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a favor de todas las personas, sin discriminación alguna. En particular, se resalta la importancia y el contenido del Derecho Humano a la Educación en el acceso y pleno disfrute de otras garantías fundamentales.

Ahora bien, se consideran las situaciones de vulnerabilidad estructural y discriminación histórica a las que han sido sometidos los pueblos originarios en las Américas, así como la respuesta de la comunidad internacional al establecer un régimen jurídico de protección especial a favor de las personas indígenas.

Al considerar la educación indígena dentro de ese régimen jurídico especial de protección, se concluye que la educación para pueblos originarios requiere de acciones particulares de los Estados para conceptualizarlos según la identidad cultural y ancestral. Asimismo, se describe que, conforme a la jurisprudencia interamericana, se debe garantizar su acceso educativo en condiciones de igualdad, bajo sistemas de enseñanza con enfoque intercultural, previamente consultados y coordinados con tales comunidades, cuya prestación se ejerza dentro de los territorios ancestrales.

Palabras Clave: Derechos Humanos, Derecho a la Educación, Pueblos Indígenas, Derecho Educativo Indígena.

INTRODUCCIÓN

La presente ponencia tiene como objetivo identificar el estatus jurídico internacional de la Educación Indígena, según el régimen de protección especial previsto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a favor de los pueblos indígenas.

Para ello, se describirán los sistemas e instrumentos internacionales de protección general y su correlación con el régimen especial a favor de los pueblos indígenas. Dentro de ese contexto, se observará el propósito, contenido y alcances del Derecho Humano a la Educación.

De esa manera, tras la conjunción del régimen jurídico de protección especial con los alcances de la garantía educativa, se procederá a detallar cuáles son las condiciones especiales que impone el ordenamiento internacional a la hora de identificar el estatus jurídico educación indígena; todo esto acompañado de citas jurisprudenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Objetivo General:

Identificar el estatus jurídico internacional de la Educación Indígena a partir del régimen especial de protección para los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.

Los usuarios de la información generada son todas aquellas personas relacionadas con la gestión educativa para pueblos indígenas, así como las que tengan interés de analizar y discutir sobre la temática.

METODOLOGÍA

Esta ponencia es un esfuerzo de recopilación doctrinaria y normativa en materia de educación indígena, según el régimen especial de protección reconocido por el Derecho Internacional de Derechos Humanos a favor de los pueblos indígenas y tribales. La información recopilada ha sido sintetizada bajo el método de análisis deductivo; el cual permitió concluir el estatus jurídico internacional de la educación indígena, tras la consideración de las premisas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, particularmente, del Derecho Humano a la Educación.

RESULTADOS

1. El estatus jurídico internacional de los pueblos indígenas.

Ante las atrocidades cometidas a lo largo de la historia humana y, particularmente, a las de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional encontró necesario establecer un régimen jurídico de protección internacional a favor de todas las personas, sin distinción alguna, en todas partes del mundo. De esa manera, tras la consolidación de organismos internacionales de cobertura mundial (como la ONU y sus agencias), se instauró y fortaleció el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El *corpus iuris* que ha resultado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir de la segunda mitad del Siglo XX, ha permitido ponderar la dignificación del ser humano dentro de las políticas públicas de los Estados, brindar importancia a los derechos requeridos para el desarrollo de su potencialidad personal y asegurar sistemas jurídicos supranacionales de tutela, protección e indemnización de garantías fundamentales (Steiner & Uribe, 2014).

El concepto de la *dignidad humana* retoma su propio auge, para convertirse en el fundamento iusfilosófico de los Derechos Humanos. Por esa razón, la comunidad internacional ha previsto un ordenamiento jurídico preponderativo para garantizar la protección de las personas, por el simple hecho de su condición humana. Esto demanda el respeto de los Estados hacia la dignidad de los individuos, en cada uno de los atributos de la personalidad humana (Ferrer & Peyalo, 2014). En ese sentido, por ejemplo, pueden observarse parte del contenido de los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...). Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna (...).

Aunque estos aspectos en la validez jurídica de los Derechos Humanos representa un avance importante, la eficacia de los mismos sigue siendo una temática de contención. La realidad práctica y aplicativa de las garantías fundamentales demuestra que ciertas poblaciones y personas aún sufren violaciones contra sus derechos fundamentales.

Algunas de estas violaciones se originan en condiciones de discriminación histórica; razón por la cual estos pueblos se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Desde la óptica jurídica, ese término se define como un estado de riesgo que aumenta la propensión de las personas para encontrarse víctimas de violaciones sistemáticas y estructurales contra sus derechos humanos (Abrisketa, 2004).

Particularmente, en las Américas, los pueblos indígenas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, a causa de la discriminación histórica por su origen étnico; la cual se remontan desde el tiempo de la colonización ibérica, en donde aquellos fueron sometidos, masacrados y casi exterminados por medio de la fuerza de las armas (Berryman, 2003). Esta es una situación estructural que les excluyó y todavía les excluye del pleno goce de sus derechos fundamentales, perpetuada a través de la indiferencia de las autoridades públicas.

De hecho, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reiterado las observaciones acerca del estado de vulnerabilidad que continúa perpetuándose en contra de los pueblos indígenas de las Américas, situación de la cual nacen obligaciones jurídicas internacionales para adoptar medidas especiales de protección. Con ello, se pretende eliminar la indiferencia de las autoridades públicas en esta temática. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido lo siguiente:

Cada Estado debe asegurar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales gocen efectivamente de todos los derechos humanos, en pie de igualdad con el resto de la población. (...). Esta obligación general del Estado adquiere un contenido adicional en el caso de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. (...). La necesidad de tal protección especial surge de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos humanos. (2009, párr.48-49).

De esta manera, para reconocer y revertir las situaciones estructurales y las violaciones sistemáticas contra las garantías fundamentales de los pueblos indígenas, la comunidad internacional no sólo ha optado por el régimen jurídico general de protección, preconfigurado para todas las personas en un plano de mera igualdad. Al contrario, dentro del Derecho Internacional de Derechos Humanos existe una especialización jurídica cuyo objeto es velar por la seguridad y la protección internacional singularizada en personas indígenas.

Ese régimen jurídico de protección especial para pueblos indígenas se reconoce en diversos instrumentos internacionales; dentro de los cuales destacan los siguientes:

- Convenio sobre pueblos indígenas y tribales No. 169 (1989), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En particular, en concordancia con los artículos 3 del Convenio de la OIT y 5 de la Declaración de la OEA, el artículo 1º de la Declaración de la ONU establece lo siguiente:

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Ante ello, las personas integrantes de los pueblos indígenas y tribales cuentan con derechos especiales derivados de su origen étnico e identidad cultural, además de los derechos generales que han sido reconocidos en el régimen jurídico de alcance universal.

2. Generalidades del derecho humano a la educación.

En ese régimen jurídico de alcance universal, se ha enunciado un derecho general que se reviste de importancia en el acceso a otras garantías fundamentales: el Derecho Humano a la Educación.

Este derecho tiene un amplísimo desarrollo en instrumentos internacionales (Villafuerte Vega, 2018), entre los cuales se pueden enumerar los siguientes: artículos 12.4 y 26 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); 4.xi de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia (2013); 20 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015); 1-5 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960); 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006); 23, 28, 29 y 32.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); 15 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016); 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 10.1 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 13 y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988); 2 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1952).

Como se puede observar de lo anterior, los instrumentos internacionales que enuncian el Derecho Humano a la Educación son posteriores al año 1948. Dentro de ese contexto dignificador de la segunda mitad del Siglo XX, la educación ostenta tutela jurídica internacional al considerarse como un mecanismo necesario para la coersión social, la formación de la dignidad humanista de las personas y las comunidades, la pacificación global y la consolidación de una sociedad democrática y libre (Villafuerte Vega, 2019).

Ahora bien, la importancia radical del Derecho Humano a la Educación proviene de su denominación como un “key right”; tradúzcase como un derecho llave en el acceso a las demás garantías fundamentales y/o un derecho clave en pleno disfrute de otros derechos fundamentales (UNESCO, 2019). Los saberes, aptitudes y valores recibidos por los medios de transmisión intergeneracional brindados por la Educación, permite que las personas gocen de mayores habilidades y conocimientos en la defensa de su tutela internacional.

Así, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece una interrelación necesaria entre el Derecho Humano a la Educación con otras garantías fundamentales, pues su ejercicio y defensa autónoma depende de conocimientos y condiciones mínimas de formación social (Pacheco Fernández, 2003; Parra Vera et. al., 2008). Al respecto, se ha sostenido lo siguiente:

La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando ese derecho se niega o viola (Tomaševski, 2003, p.10).

En este punto, es necesario recordar que el Derecho Humano a la Educación es parte de las medidas básicas para el desarrollo progresivo; características de los derechos sociales, económicos y culturales. Estos generan obligaciones jurídicas internacionales, a través de medios inmediatos, apropiados y efectivos, para respetar el acceso a tales derechos, proteger contra cualquier medida que resulte perjudicial, cumplir los estándares normativos y de políticas públicas, así como facilitar y promover condiciones especiales de acceso (Parra Vera et. al., 2008).

De esa manera, el Derecho Humano a la Educación no sólo se reviste de su conceptualización general, ubicada a través de los instrumentos internacionales. Al considerarse como un derecho progresivo, éste demanda estándares mínimos de aplicabilidad y, a partir de ahí, el Estado debe tomar medidas graduales, constantes y consistentes para avanzar y progresar desde aquel estándar mínimo. Una vez alcanzado mayores niveles prestacionales, no se permite la regresividad (Courtis, 2014).

Para alcanzar mayores niveles y estándares de progresividad, la comunidad internacional ha considerado oportuno enunciar cuatro características elementales para la ejecución del Derecho Humano a la Educación; las cuales se describen a continuación (Parra Vera et. al., 2008; Tomaševski, 2001 y 2003):

- Disponibilidad: Los centros y programas educativos deben ser suficientes para toda la población, según su distribución geo-demográfica.
- Accesibilidad: El acceso a la educación debe ser universal, sin discriminación alguna. Debe garantizarse la gratuidad y el mínimo costo de los servicios de enseñanza, según el nivel y etapa educativa. Los centros de educación deben garantizar su respectiva asequibilidad material.
- Aceptabilidad: Los programas educativos deben ser pertinentes (según su contexto nacional, regional, social y laboral) y de calidad (a través de la comprobación evaluativa de estándares mínimos de eficacia y eficiencia).
- Adaptabilidad: Los servicios y programas educativos deben adaptarse a cualquier cambio que se suscite en los diversos ámbitos de la vida en sociedad.

La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha añadido estas características elementales a sus estándares regionales de protección; los cuales se incluyen dentro de las medidas que cada Estado debe incorporar en su ordenamiento interno. Por ejemplo, refiérase al informe temático “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres” (2011, párr.194) y el informe de fondo No. 110/18 del Caso No. 12678

(2018, párr.115) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la sentencia del Caso González Lluy y otros vs. Ecuador (2015, párr.234-235) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que estas características elementales para la ejecución del Derecho Humano a la Educación son aplicables en todas las etapas educativas, manifestaciones culturales y formas de enseñanza; así como a cualquier población.

3. El derecho humano a la educación indígena.

Como se sostuvo con anterioridad, además del régimen jurídico general que emana del Derecho Humano a la Educación, existe un régimen especial de protección jurídica internacional relativa a la educación para pueblos indígenas, a tal nivel que podría denominarse “derecho humano a la educación indígena”.

Efectivamente, el Derecho Humano a la Educación para pueblos indígenas se reviste de particularidades únicas, pues esta tutela jurídica especial se fundamenta en la identidad cultural de dichas agrupaciones étnicas (Soria Verdera, 2014). Así, la gestión educativa indígena debe visualizarse desde la autoconcepción, manifestaciones culturales, lengua, conocimientos ancestrales e identidad de los pueblos originarios.

Por ese motivo, los instrumentos internacionales del régimen jurídico especial de protección, enuncian y reafirman particularidades para la educación de los pueblos indígenas, según se puede observar en el Cuadro No. 1:

Cuadro No. 1: Elementos del derecho humano a la educación indígena.

Derecho / Instrumento internacional	CPIT (OIT)	DDPI (ONU)	DADPI (OEA)
Igualdad en el acceso a todos los niveles de educación	Art. 26	Art. 14.2	Art. 16.1 y 16.2
Educación y preservación de la lengua indígena	Art. 28	Art. 14.1	Art. 16.3
Derecho de consulta y participación en programas educativos	Art. 27.2	--	--
Programas educativos con enfoque de identidad cultural	Art. 27	Arts. 14.1 y 15.1	Art. 16.3
Programas educativos con miras a la participación activa intercultural	Arts. 29 y 30	--	Art. 16.5
Instituciones educativas de autoorganización indígena	Art. 27.3	Art. 14.1	Art. 16.3
Eliminación de estereotipos históricos por etnicidad	Art. 31	Art. 15.2	Art. 16.5
Formación y profesionalización	Arts. 21 y 22	Art. 21.1	--

Fuente: elaboración propia, según clasificación de instrumentos internacionales.

Como se puede observar del anterior cuadro, el Derecho Humano a la Educación Indígena garantiza que los pueblos indígenas puedan acceder a los servicios de enseñanza, en un plano de igualdad frente a otras personas sin dicha condición étnica. Asimismo, tales servicios deben constituirse a partir de la identidad cultural de los pueblos indígenas, para la preservación de los conocimientos, valores, lenguas y formas de autoorganización propia.

Es decir, la educación indígena se construye desde la autoconcepción de la comunidad ancestral y para la prestación de la misma comunidad. Los pueblos indígenas pueden construir sus propios medios de educación, según sus usos y costumbres; siendo que cuando el Estado quiere brindar los servicios oficiales de educación, debe hacerlo tras la consulta y participación activa de tales comunidades. Por ende, las prácticas educativas ajenas a su concepción ancestral, occidentalizadoras o colonialistas, se encuentran prohibidas por considerarse impositivas y subyugadoras.

Por lo demás, la educación indígena debe buscar la eliminación de los estereotipos que han perpetuado la discriminación histórica contra tales pueblos, así como las condiciones de vulnerabilidad estructural y exclusión a las que han sido sometidos.

La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no sólo ha reconocido y aplicado esos derechos particulares para la educación indígena, sino que también ha extendido los alcances y principios de esta garantía fundamental. Singularmente, entre otros estándares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha encargado de reiterar tres líneas jurisprudenciales sobre esta temática, las cuales se analizan a continuación:

- Acceso: Las personas indígenas, sobre todo los menores de edad, tienen derecho a acceder a los sistemas de enseñanza en un plano de igualdad frente a todas las personas, los cuales deben ubicarse dentro de sus territorios ancestrales y con demostrada calidad educativa (Informe de fondo No. 125/12, párr. 295-293).
- Consulta: Los programas educativos deben ser sometidos a consulta previa de los pueblos indígenas, cuando estos se impartan dentro de los territorios ancestrales (Informes de fondo No. 12/85, párr. R.3.c; No. 76/12, párr. 201; No. 30/13, párr. 93).
- Identidad: La educación indígena debe corresponder a la identidad cultural de los pueblos originarios, para la preservación de sus valores sociales (Informe de fondo No. 125/12, párr. 210 y 259).

CONCLUSIONES

1. Todas las personas en todo el mundo tienen derechos fundamentales por la dignidad que deriva de su simple condición de humanidad, los cuales son reconocidos y garantizados en un plano de igualdad.
2. Sin embargo, existen poblaciones y personas que, por motivos de discriminación histórica y vulnerabilidad estructural, no tienen pleno goce de sus derechos fundamentales; dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas.
3. En vista de esas situaciones, el Derecho Internacional de Derechos Humanos ha previsto un régimen jurídico de protección especial a favor de los pueblos indígenas, el cual reconoce derechos singulares y particulares relacionados con su identidad cultural, así como todas las demás garantías de alcance universal.
4. Dentro de dichas garantías se encuentra el Derecho Humano a la Educación, el cual permite el acceso y pleno disfrute de otros derechos fundamentales. Su importancia radical reside en la preparación, formación y transmisión de conocimientos, aptitudes y valores para las siguientes generaciones.

5. Ahora bien, el Derecho Humano a la Educación para pueblos originarios requiere de acciones particulares, pues la concepción de la educación indígena nace a partir de su identidad cultural. De esta manera, los Estados deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad para estas personas, bajo sistemas de enseñanza con enfoque intercultural, previamente consultados y coordinados con tales comunidades, cuya prestación se ejerza dentro de los territorios ancestrales.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Abrisketa, J. (2004). *Derechos humanos y acción humanitaria*. Zarautz, España: Ed. Alberdania.
- Berryman, P. (2003). *Teología de la liberación*. Distrito Federal, México: Ed. Siglo XXI.
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (2014). *Sumarios de jurisprudencia: Pueblos indígenas*. Buenos Aires, Argentina: CEJIL.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). *Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales*. Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011). *El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales*. Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001). *Fuentes en el Derecho Internacional y Nacional del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1985). Informe No. 12/85, Caso No. 7615, *Pueblos indígenas Yanomami* (Brasil). Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012). Informe No. 76/12, Caso No. 12548, *Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz* (Honduras). Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012). Informe No. 125/12, Caso No. 12354, *Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Embera de Bayabo* (Panamá). Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe No. 30/13, Caso No. 12761, *Comunidad Garífuna de Punta Piedra* (Honduras). Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). Informe No. 110/18, Caso No. 12678, *Paola del Rosario Guzmán Albarracín y Familiares* (Ecuador). Washington D.C., Estados Unidos: CIDH.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015). *Caso González Lluy y otros vs. Ecuador*. Sentencia del 1º de setiembre de 2015. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
- Courtis, C. "Artículo 26. Desarrollo Progresivo". En Steiner C. & Uribe, P. *Comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos* (pp.654-676). Bogotá, Colombia: Fund. Konrad Adenauer.
- Ferrer Mac-Gregor, E. & Pelayo Möller, C.M. (2014). "Preámbulo". En Steiner C. & Uribe, P. *Comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos* (pp.29-41). Bogotá, Colombia: Fund. Konrad Adenauer.
- Tomaševski, K. (2001). *Human rights obligations: making education available, accesible, acceptable and adaptable*. Gutemburgo, Suecia: Swedish International Development Cooperation Agency.
- Tomaševski, K. (2003). *Contenido y vigencia del derecho a la educación*. San José, Costa Rica: IIDH.
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019). *Right to education handbook*. París, Francia: UNESCO.

- Pacheco Fernández, F.A. (2003). *La relación de la educación en derechos humanos con el derecho a la educación*. San José, Costa Rica: IIDH, 2003.
- Parra Vera O., Villanueva Hermida M.A. & Enrique Martín A. (2008). *Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. San José, Costa Rica: IIDH.
- Soria Verdera, R.E. (2014). *Introducción al análisis del Derecho Educativo*. Alta Gracia, Argentina: Eds. Pirca.
- Steiner C. & Uribe, P. (2014). "Introducción general". En Steiner C. & Uribe, P. *Comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos* (pp.2-17). Bogotá, Colombia: Fund. Konrad Adenauer.
- Villafuerte Vega, A. (2018). "La relación entre el Derecho Humano a la Educación y la autonomía universitaria". En F. González Alonso. *El Derecho Educativo: Miradas Convergentes* (pp.223-236). Sevilla, España: Ed. Caligrama.
- Villafuerte Vega, A. (2019). "Teleología jurídica de la Educación". En L.M. Duso Pacheco & A. Villafuerte Vega. *Derecho Educativo: Reflexiones sobre la Cultura de Paz en un contexto globalizado* (pp.169-186). San José, Costa Rica: Ed. ISOLMA.